



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE: Flor Edilma Riaño y otros
DEMANDADO: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-
RADICACIÓN: 15 001 3333 004 2018 00170 00

Visto el informe secretarial y revisado el expediente, el Despacho procede a pronunciarse sobre la admisión de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La abogada Cándida Rosa Parales Carvajal promovió demanda ordinaria y formuló pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa (fl. 96), contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como apoderada especial de las señoras:

- Aminta León De Cuchigay
- Ana Gilma Chocontá Díaz
- Ana Joaquina Acevedo Montañez
- Ana Lucy Talero Rodríguez
- Ana Otilia Díaz Bautista
- Dora Gilma Rojas De Condiza
- Doris Amanda Pulido Tavavija
- Edilsa Cruz Giral
- Eloisa Rodríguez Avendaño¹
- Flor Edilma Riaño Afanador
- Flor Esminda Chaparro Lemus
- Flor María Cruz de Cruz
- Flor María Del Carmen Morales Torres
- Ruth Maritza Macan Barrera hija de Flor Maritza Barrera Medina (Q.E.P.D.)
- Gladis Nubia Condiza Nossa
- Gloria de los Ángeles Chaparro De Chaparro
- Gloria Herminda Pulido De Cardozo
- Gloria Inés Aranguren Cruz
- Gloria Inés Lemus De Barrera
- Gloria Inés Prieto Salamanca
- Gloria María Moreno de López
- Lilia Pulido Alba
- Liliana López Moreno
- Lina Gutiérrez
- Lucila Giral De Campos
- Luz Myriam Tibavija Mora
- Margarita Cruz Romero

¹ Sin poder conferido para demandar

- *María Ana Eulises Martínez de Chaparro*
- *María Ana Isabel Riaño León*
- *María Anacelia Tabaco Pidiache*
- *María Carmen Rosa Martínez Chaparro*
- *María Celia Lemus García*
- *María Del Carmen López Rodríguez*
- *María Del Carmen Pulido Martínez*
- *María Del Transito González Rojas*
- *María Edilma Moreno Cruz*
- *María Edilsa Talero Joya*
- *María Elena Barrera Lemus*
- *María Elena Martínez Cardozo*
- *María Elsa Mesa Sierra*
- *María Esther Socha Moreno*
- *María Eugenia García Nofuya*
- *María Hortencia Gutiérrez Cardozo*
- *María Inés Soler Pulido*
- *María Isabel León*
- *María Isabel Riaño Sánchez*
- *María Nelly Riaño Riaño*
- *María Nelcy Pulido Nomesque*
- *María Nieves Parra*
- *María Roseli López Talero*
- *María Solis Bejarano Caballero ²*
- *María Yaneth Riaño Riaño*
- *María Yohana Cardozo Chaparro*
- *Mariela Chaparro Trujillo*
- *Mariela León Alba*
- *Martha Clelia Rodríguez Pérez*
- *Martha Liliana Cuchigay Montaña*
- *Mercedes García*
- *Mireya Chaparro Jiménez*
- *Myriam Giral Guanumen*
- *Myriam Yaneth Martínez Pulido*
- *Nelba María Soler Pulido*
- *Nelly Rocío Cardozo Melo*
- *Nidia Liliana Pérez Pérez*
- *Ninfa Trujillo Pérez*
- *Olga María Vargas Calvo*
- *Policarpa Herrera De Talero*
- *Rosalba Martínez Rodríguez*
- *Roselina Soto de Nomesque*
- *Sara Delfina Patarroyo Barrera*
- *Soledad Morales Fonseca*
- *Stella Naranjo Amézquita*

² *Poder sin presentación personal*

Solicitó se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el “oficio S-2017-092276-2500 de fecha 21 de febrero de 2017” (fl. 104), proferido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y a título de restablecimiento del derecho, que se declare la existencia de sendos vínculos laborales entre las demandantes, en condición de servidoras públicas, y el ICBF; que se condene al pago de salarios prestaciones y todo emolumento laboral dejado de percibir por las demandantes, mientras ostenten o hayan ostentado la condición de madres comunitarias, y al pago de aportes en seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) durante el tiempo laborado; que se paguen los daños y perjuicios materiales por conceptos de *“lucro cesante, correspondiente a los valores dejados de recibir por cada madre comunitaria demandante, por el tiempo de uso y utilización de sus residencias puestas al servicio de los hogares comunitarios”*, daños morales, a la vida de relación y afectación a derechos y bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

Finalmente, que se condene a la demandada a pagar intereses sobre los valores reconocidos y el pago de costas.

II. CONSIDERACIONES

Con relación a las pretensiones, el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

(...)

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.”

A su turno, la acumulación de pretensiones encuentra regulación en el artículo 165 *ibídem*, en el cual se establece:

“Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.”

De otra parte, en lo que concierne a la competencia, el numeral 3 del artículo 156 del CPACA señala:

*“Art. 156.- **Competencia por razón del territorio.** Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:
(...)”*

- 1. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Se determinara por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios.(...)”*

Ahora bien, examinado el memorial obrante a folios 805-807, la parte demandante señaló respecto a cada una de las demandantes, el lugar en el que prestan o habrían prestado sus servicios tales como los municipios de **Tota, Sogamoso, Tópaga, Pajarito, Labranzagrande, Aquitania Cuítiva, Firavitoba y Pisba**, los cuales no hacen parte del Circuito Judicial Administrativo de Tunja, sino del Circuito Judicial Administrativo de Sogamoso, según lo dispuesto en el artículo primero del Acuerdo N° PSAA 15-10449 de 31 de diciembre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Al considerar que el último lugar de prestación de servicios determina la competencia territorial, de conformidad con el numeral 3 del artículo 156 del CPACA, el Despacho concluye que son competentes para conocer de la presente demanda los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Sogamoso – Reparto. Adicionalmente, al haberse formulado pretensiones de nulidad y de reparación directa, debe estimarse que la competencia para conocer es del juez de la nulidad, por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 *ejusdem*, y en concordancia con lo previamente expuesto, se dispondrá la remisión del expediente a dichos juzgados, para lo de su cargo.

Por último, conviene precisar que, entre las demandantes, únicamente la señora María Solís Bejarano Caballero habría prestado sus servicios en el municipio de Puerto Boyacá (fl. 806), comprendido en el Circuito Judicial de Tunja, según Acuerdo No. PSAA06-3321 de 2006, razón por la cual, las pretensiones formuladas por esta demandante están llamadas a ser tramitadas ante este Despacho, y respecto a las cuales se continúa el estudio de admisión de la demanda, en los siguientes términos:

- **Estudio de admisión de la demanda de señora María Solís Bejarano Caballero**

La demanda formulada por la señora Bejarano Caballero, de conformidad con los artículos 162, 165 y 166 de CPACA, carece de varios requisitos legales y anexos, de manera que la misma habrá de ser inadmitida con el fin de que se subsanen los siguientes aspectos:

1.- Readecuación de la demanda. En virtud de lo expuesto previamente, el libelo introductorio deberá contener exclusivamente las pretensiones, hechos y medios de prueba dirigidos a resolver la controversia planteada por la señora María Solís Bejarano Caballero.

2.- Falta de identificación e individualización del acto demandado. Al examinar la demanda puede advertirse, de una parte, que la misma pretende la nulidad del acto administrativo contenido en el “oficio S-2017-092276-2500 de fecha 21 de febrero de 2017”, y de otra, que se encuentra aportado un oficio sin fecha de la Regional Cundinamarca del ICBF, visible a folios 137 a 140, por el cual se resolvió una reclamación administrativa, consistente en el reconocimiento y pago de derechos laborales.

En este orden, en aplicación del artículo 163 del CPACA, la parte demandante deberá identificar e individualizar el acto que pretende demandar de manera adecuada —y aportarlo con los anexos del caso—, de conformidad con la norma en mención que dispone:

“Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.”

En todo caso, si lo perseguido es la nulidad del acto administrativo contenido en el “oficio S-2017-092276-2500 de fecha 21 de febrero de 2017”, debe advertirse que no obra ningún documento con esta referencia, razón por la cual, la parte demandante deberá aportar copia del acto demandado con constancia de notificación, o manifestar la negativa de la entidad para suministrarlo indicando la oficina donde se encuentra el original.

Al respecto, conviene recordar que el artículo 166 del CPACA, con relación a los anexos de la demanda, dispone en el numeral 1) lo siguiente:

“Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio Web de la respectiva entidad para todos los fines legales.”

Aunque la parte demandante señaló que el mismo no fue “notificado”, afirmación que se entiende prestada bajo gravedad de juramento por disposición legal del artículo en cita, omitió indicar si la copia del acto fue negada por parte de la entidad y, en ese caso, indicar en cuál oficina se encuentra el original para efecto de que el Despacho lo solicite, previo a la admisión de la demanda, falencia que también deberá ser objeto de subsanación.

3.- Ausencia de poder. Revisado el expediente, se encuentra que el poder conferido por la señora María Solís Bejarano Caballero al abogado Luis Eduardo Pineda Palomino, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.715.256 y T.P. N° 50.642 del C.S.J. (f. 63), no cumple con el requisito de la presentación personal ante el juez, oficina judicial de apoyo o notario, previsto en el artículo 74 del CGP.

Dado que el poder inicial no cumple los requisitos establecidos en el artículo 74 en mención, no puede predicarse el derecho de postulación del abogado Pineda Palomino, en ese orden tampoco puede considerarse sustituido el poder a la abogada Cándida Rosa Parales Carvajal, identificada con cédula de ciudadanía N° 68.288.454 y T.P. N° 215.862 del C.S.J. (fls. 93-94), para promover la presente demanda, en representación de la señora Bejarano Caballero. Así las cosas, la parte demandante deberá corregir esta falencia, para lo cual allegará el poder con la presentación personal del caso.

Con fundamento en lo expuesto, el Juzgado inadmitirá la demanda con el fin de que la misma sea corregida, en el término de diez (10) días, según lo establecido en el artículo 170 del CPACA.

De conformidad con lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

PRIMERO.- Declarar que este Juzgado **carece de competencia** para conocer la demanda formulada por las señoras Aminta León De Cuchigay, Ana Gilma Chocontá Díaz, Ana Joaquina Acevedo Montañez, Ana Lucy Talero Rodríguez, Ana Otilia Díaz Bautista, Dora Gilma Rojas De Condiza, Doris Amanda Pulido Tavavija, Edilsa Cruz Giral, Eloisa Rodríguez Avendaño, Flor Edilma Riaño Afanador, Flor Esminda Chaparro Lemus, Flor María Cruz de Cruz, Flor María Del Carmen Morales Torres, Ruth Maritza Macan Barrera hija de Flor Maritza Barrera Medina (Q.E.P.D.), Gladis Nubia Condiza Nossa, Gloria de los Ángeles Chaparro De Chaparro, Gloria Herminda Pulido De Cardozo, Gloria Inés Aranguren Cruz, Gloria Inés Lemus De Barrera, Gloria Inés Prieto Salamanca, Gloria María Moreno de López, Lilia Pulido Alba, Liliana López Moreno, Lina Gutiérrez, Lucila Giral De Campos, Luz Myriam Tibavija Mora, Margarita Cruz Romero, María Ana Eulises Martínez de Chaparro, María Ana Isabel Riaño León, María Anacelia Tabaco Pidiache, María Carmen Rosa Martínez Chaparro, María Celia Lemus García, María Del Carmen López Rodríguez, María Del Carmen Pulido Martínez, María Del Transito González Rojas, María Edilma Moreno Cruz, María Edilsa Talero Joya, María Elena Barrera Lemus, María Elena Martínez Cardozo, María Elsa Mesa Sierra, María Esther Socha Moreno, María Eugenia García Nofuya, María Hortencia Gutiérrez Cardozo, María Inés Soler Pulido, María Isabel León, María Isabel Riaño Sánchez, María Nelly Riaño Riaño, María Nelcy Pulido Nomesque, María Nieves Parra, María Roseli López Talero, María Yaneth Riaño Riaño, María Yohana Cardozo Chaparro, Mariela Chaparro Trujillo, Mariela León Alba, Martha Clelia Rodríguez Pérez, Martha Liliana Cuchigay Montaña, Mercedes García, Mireya Chaparro Jiménez, Myriam Giral Guanumen, Myriam Yaneth Martínez Pulido, Nelba María Soler Pulido, Nelly Rocío Cardozo Melo, Nidia Liliana Pérez Pérez, Ninfa Trujillo Pérez, Olga María Vargas Calvo, Policarpa Herrera De Talero, Rosalba Martínez Rodríguez, Roselina Soto de Nomesque, Sara Delfina Patarroyo Barrera, Soledad Morales Fonseca y Stella Naranjo Amézquita, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- Inadmitir la demanda ordinaria presentada por la señora **María Solís Bejarano Caballero** contra la **Instituto colombiano de Bienestar Familiar**, en ejercicio de medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa.

TERCERO.- Conceder a la parte demandante el término de diez (10) días para que corrija la demanda, y subsane los defectos anotados en la parte motiva de esta providencia, so pena de rechazo.

CUARTO.- En firme esta providencia, por Secretaría **remitir** la demanda y anexos de las presentes diligencias al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos de Tunja, para que por su conducto se remita a los Juzgado Administrativos del Circuito Judicial de Sogamoso – Reparto, para lo de su competencia, para lo cual se dejarán las constancias y anotaciones de rigor.

Conservar la copia auténtica de la sustitución de poderes y del escrito de demanda que obran a folios 93-135, copia de los archivos aportados en cd identificado como folio 135-1, originales de los documentos obrantes a folios 63, 131-173 y 610-622, los cuales deberán reemplazarse por copias auténticas en el expediente que remita para reparto de los Juzgados del Circuito Administrativo de Sogamoso.

QUINTO.- La parte actora deberá allegar el escrito de subsanación de la demanda de la señora María Solís Bejarano Caballero y copias del mismo, **en medio magnético**, para que sean anexados a los respectivos traslados y al expediente.

SEXTO.- No reconocer personería a la abogada Cándida Rosa Parales Carvajal identificada con cédula de ciudadanía N° 68.288.454 y T.P. N° 215.862 del C.S.J.; como apoderada especial de la señora María Solís Bejarano Caballero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

³Cesco

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO
N° 60 De Hoy 9 de noviembre de 2018
A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 9 de noviembre de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario